

Señores Magistrados

Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Cuarta

La ciudad

Asunto:	Acción de Tutela
Accionante:	Compañía Mundial de Seguros y otros
Accionados:	Magistrados Dres. Alberto Montaña Plata, Fredy Ibarra Martínez y Martín Bermúdez Muñoz como integrantes de la Sub Sección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Radicación:	11001 – 03 – 15 – 2025 – 02866 – 00
Ponente:	Magistrado Dr. Wilson Ramos Girón

Juan Pablo Riveros Lara, abogado identificado personal y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, apoderado de la sociedad Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. – CEDELCA (Cedelca en lo sucesivo), obrando en virtud del mandato que al efecto me fue concedido con el lleno de los requisitos de ley por su Gerente y Representante Legal, el ingeniero Pedro Elías Rojas Cáceres, el cual adjunto para los fines pertinentes (Anexo No. 1), concurre ante esa Corporación Judicial dentro del término fijado en el auto admisorio de la Acción de Tutela identificada bajo el Asunto, según lo decidido en el Auto del 9 de junio de 2025 (numeral 4º), para fijar, todo lo sucintamente que sea posible, la posición de mi poderdante como tercero interesado en la tramitación constitucional ya identificada.

A lo anunciado procedo en los siguientes términos:

I. Nota previa

Por medio de un escrito de extensión descomedida e inocultable farragosidad los accionantes pretenden, por la vía de la fatiga lejos de la de la razón, hacer patente su descontento frente a la decisión de los Magistrados accionados, con el muy posible fin de justificar la torpeza de su proceder al momento de ajustar unos negocios jurídicos con la sociedad Soinco, sin reparar en la verdadera naturaleza jurídica de los mismos y en las exigencias legales que han debido observar para que dichos acuerdos de voluntades pudieran producir efectos jurídicos y económicos frente a Cedelca, tercero de buena fe exenta de toda culpa y a quien ahora se pretende afectar sin justificación alguna.

En dirección a ese objetivo los accionantes estructuraron la teoría sobre la cual descansa el insufrible escrito de tutela, teoría que reposa sobre una falacia cuya exposición, a lo sumo, ha debido ocupar dos o tres cuartillas.

II. El *summum* de la posición de los accionantes

Los accionantes sugieren que la sentencia del Consejo de Estado del 10 de octubre de 2024, por la cual se desató la segunda instancia del juicio ejecutivo iniciado en contra de CEC contra Cedelca, vulnera los derechos y garantías a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el derecho a ser oídos, esta último de origen convencional y aquellos de estirpe constitucional.

El juicio ejecutivo y al cual se acumularon los promotores de la presente acción constitucional, versó sobre el cobro de una condena económica impuesta a Cedelca en laudo arbitral del 4 de abril de 2014, promovido en su contra por CEC.

Esa condena dio lugar a un juicio ejecutivo en el curso del cual se libró mandamiento de pago, inicialmente a favor de CEC y posteriormente a favor de los accionantes como ejecutantes acumulados.

Dicho mandamiento de pago quedó sin efecto por razón de haberse encontrado probada en primera y segunda instancia la excepción de compensación propuesta por Cedelca en la referida ejecución. Es decir, tanto CEC como los ejecutantes acumulados fueron vencidos y condenados en costas por haberse deducido, en primera y segunda instancia, que los ejecutantes no tenían derecho a perseguir judicialmente ya que se habían extinguido por compensación.

Los accionantes difieren de la sentencia de segundo grado proferida en el juicio ejecutivo indicado y enfilan acción de tutela contra ella debido a que, en su sentir, el Consejo de Estado erró al declarar probada la compensación propuesta por Cedelca, ya que la misma no se atiene a las exigencias previstas en el número 2 del artículo 442 del Código General del Proceso, norma a cuyas voces, en el juicio ejecutivo que tiene por título una providencia judicial:

“... sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia...” (negritas propias)

Los solicitantes del amparo que ocupa la atención de la Sala requirieron de 90 hojas para sugerir que los Magistrados accionados cometieron el atropello que se les endilga porque la compensación declarada lo fue con

desconocimiento del precepto legal anteriormente señalado ya que la cesión que operó a su favor – que los mismos accionantes debido a su propia torpeza cuando la celebraron no saben si calificar como de créditos o de derechos litigiosos¹ – se consolidó en el año 2010 en desarrollo del juicio arbitral promovido en su contra por CEC, razón por la cual la compensación alegada por mi poderdante no se basa en hechos posteriores al laudo de abril de 2014 y en esas circunstancias no ha debido entonces ser acogida en la sentencia que se fustiga en este trámite.

Nada hay más alejado de la verdad material y de la realidad procesal acogida en la sentencia objeto de esta tutela, como pasa a demostrarse:

i) Las cesiones que se enrostran a los accionados como ilegalmente desconocidas, no se tramitaron con arreglo a la ley como cesiones de créditos (porque no había créditos qué ceder) ni de derechos litigiosos (porque no se tramitaron como tales) y de allí la inocuidad legal predicable de las mismas en el ámbito del proceso arbitral en cuyo trámite los accionantes sostienen que las mismas fueron conocidas por Cedelca: a) Porque no puede cederse un crédito que no se tiene; b) Porque la cesión de un derecho litigioso tiene unas reglas sustanciales y otras de procedimiento cuya inobservancia la hace inane

Es de aclarar que a lo largo del fatigante texto de tutela – y desde el proceso ejecutivo mismo – los accionantes no han logrado plantear cuál fue el negocio jurídico que celebraron.

Defienden ellos que bajo el eufemístico título de cesión de derechos económicos y por el hecho de haber dado noticia de su existencia al tribunal arbitral que desató las diferencias entre CEC y Cedelca, a partir de allí se debe tener por consolidado un negocio jurídico del cual Cedelca no puede predicar su ignorancia, lo que haría inaplicable al caso la preceptiva del artículo 442 del estatuto procesal civil.

Lo verdaderamente cierto es que la cadena de cesiones ocurrida entre CEC y Soinco y entre ésta y los accionantes se constituye únicamente en un grupo de documentos carentes de toda idoneidad legal para producir efectos frente a Cedelca, tanto por su contenido como por el inexistente trámite legal impreso a los mismos, esto último por la conducta negligente de los

¹ Obsérvese el numeral 2.3.17 del escrito de tutela, militante entre folios 19 y 20 del mismo, en el cual se reproduce el pronunciamiento de los accionantes sobre la compensación alegada en el juicio ejecutivo seguido en contra de Cedelca, para poder leer, destacados en negrillas por los promotores de esta acción, dos apartes del mismo texto en los que contradictoriamente califican la cesión, primeramente como de derechos de crédito y líneas más adelante como cesión de derechos litigiosos.

A folio 60 del escrito de tutela, nuevamente los accionados optan por el camino de sostener que lo ocurrido entre ellos y Soinco fue una cesión de derechos litigiosos.

accionantes a la cual haré posterior referencia basado en la realidad procesal ocurrida.

A lo largo del insufrible 90 relato del escrito de tutela, los accionantes echan mano de diversas y contradictorias tesis sobre la naturaleza jurídica de los negocios que ajustaron con Soinco.

Sin embargo, callan que justamente que la precariedad de esos documentos y la ambigüedad de su posición procesal – tema que se analizará enseguida – obligaron a los accionados a interpretar, como es su deber de jueces, cuál es la naturaleza de las tales cesiones y que régimen legal la gobierna.

El Consejo de Estado encontró entonces, que se trató de una cesión de derechos litigiosos, que la misma fue tramitada de espaldas a la ley y que como consecuencia de ello los diversos negocios jurídicos de ese temperamento que fueron allegados al juicio ejecutivo no le eran oponibles a Cedelca.

El verdadero yerro que aquí ocurrió no es imputable a los accionados, sino a los propios accionantes, quienes, además de haber celebrado un negocio insustancial y defectuoso con su cedente Soinco, dejaron precluir la oportunidad procesal que tenían en el trámite del proceso ejecutivo al cual se acumularon, al guardar silencio frente a la decisión de primera instancia de proferir una sentencia anticipada.

En esa oportunidad han debido agotar el empleo de todas las herramientas legales a su disposición, la tutela misma si fuere del caso, para demostrar que su alegado derecho de crédito se había consolidado con arreglo a la ley y debía ser reconocido en el juicio ejecutivo al que fueron acumulados.

Lo anterior con tanta mayor razón si se estudian los argumentos fundantes de la excepción de compensación que salió avante, en cuya sustentación se aludió al punto y se ofrecieron las pruebas pertinentes para ello.

Su silencio y la apelación promovida contra la sentencia de primera instancia, movieron a los accionados a interpretar el tipo de cesión ocurrida con las consecuencias e implicaciones de las que ahora se duelen los accionantes.

Adicionalmente y aunque ya se indicó:

a) No puede cederse un crédito que no se tiene

Es evidente que los accionados no podían haber ajustado con Soinco una cesión de créditos, porque para la época de celebración de los instrumentos

que documentan los acuerdos entre esas partes, ni CEC ni Soinco tenían en su patrimonio un crédito susceptible de ser cedido.

El análisis temporal de esos acuerdos me releva de adicionales consideraciones, como quiera que, a todo evento, su objeto apuntaba a transferir los derechos económicos de lo que pudiera obtener CEC a su favor en el juicio arbitral que tramitaba contra Cedelca.

Por la anterior razón los accionados, así como su *a quo*, descartaron la posibilidad de que el objeto de las cesiones fuera un crédito – por inexistente – lo que los llevó, en los dos grados de la instancia, a cumplir con su deber interpretativo para concluir que la intención de CEC y Soinco, y de Soinco y sus cesionarios, aquí accionantes, fue la de ceder un derecho litigioso.

b) La cesión de un derecho litigioso tiene unas reglas sustanciales y otras de procedimiento cuya inobservancia la hace inane

Puestas en este punto las cosas, lo que los Magistrados accionados hicieron, en cumplimiento de sus deberes judiciales, fue interpretar la intención de las partes de los acuerdos de cesión de derechos económicos materia de análisis, para concluir, de manera razonada, con fundamento en las pruebas y en ausencia total del más mínimo esfuerzo probatorio de persuasión por parte de los accionantes en otro sentido, que la naturaleza de tales cesiones era la de un derecho litigioso.

Ese ejercicio de interpretación judicial, además hecho en la más alta jerarquía de lo contencioso, lo pretenden descalificar los accionantes echando mano de unos pronunciamientos judiciales, que no son precedente horizontal – único posible de enrostrar a la Sala de Decisión demandada –, así como de algunos textos que tampoco vinculan al juez porque se constituyen en opiniones, muy autorizadas de pronto pero en manera alguna vinculantes para el juez.

Por el contrario, los Magistrados accionados, citándola o no, lo cual es absolutamente indiferente para los efectos de esta acción, siguieron los lineamientos de la Corte de la cual forman parte, contenidos por ejemplo en la sentencia del 12 de octubre de 2017² que en lo pertinente señala sobre el punto:

“En cuanto a los requisitos de perfeccionamiento del contrato de cesión de derechos litigiosos, de conformidad con lo previsto en el artículo 761 del Código Civil, cabe mencionar que dicho negocio jurídico se concluye con la sola entrega del título (documento público o privado) hecha por el cedente al cesionario; no obstante, **la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, ha sostenido que para que la cesión**

² Ponente Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

de derechos litigiosos produzca efectos jurídicos procesales, resulta necesario que el cesionario comparezca ante el juez de la causa con el fin de que reconozca dicho negocio jurídico y dé traslado del mismo a la parte cedida, con el fin de que esta última se pronuncie sobre la eventual sucesión procesal que en virtud de la cesión de derechos litigiosos se pudiese presentar.” (negrillas y subrayas propias)

En esa medida, la Acción de Tutela que nos ocupa: i) responde a una simple inconformidad de los accionantes y por lo tanto no es pasible de remedio constitucional; ii) no suplanta ni purga su pasividad probatoria en el juicio en el que fueron reconocidos, en donde han debido demostrar, como ejecutantes acumulados, la validez de la interpretación que ahora reivindican; iii) atenta y busca socavar injustificadamente la autonomía judicial y, lo que es igualmente importante, pretende ser convertida en la sede de la discusión que los accionantes no dieron en la oportunidad y escenario que correspondía, esto es, el proceso ejecutivo en el que actuaron.

ii) Por las razones anteriormente expuestas, en el laudo arbitral de abril 4 de 2014 no se resolvió nada sobre esas cesiones: a) Porque los tribunales de arbitraje nada pueden decidir fuera de la órbita de los asuntos contractuales que incumben a los contrayentes del pacto arbitral que los habilita para fallar; y porque los cesionarios, algunos de ellos hoy accionantes, obraron con proverbial incuria y no tomaron parte en dicho juicio arbitral para procurar una resolución del tribunal de arbitraje emisor del laudo de abril de 2014, lo que a su vez explica la razón por la cual en la resolutive de esa providencia no se adopta decisión alguna que los favorezca o los perjudique; b) Porque ser relacionados en los Antecedentes del laudo no constituye una declaración judicial vinculante ni produce efecto alguno

En procura de acreditar el inexistente agravio de los derechos fundamentales invocados en la tutela, los accionantes inculpan a los Magistrados accionados por no haber valorado las pruebas que daban cuenta de que las cesiones de marras se habían allegado al juicio arbitral y entonces Cedelca no podría renegar su conocimiento.

Al respecto y como no podría ser de otra forma, el lenguaje de la demanda de tutela es manifiestamente injurídico y ambivalente, única vía para lo que abiertamente puede llamarse “tapar el sol con las manos”, es decir, para tratar de excusar la conducta descuidada de los accionantes/cesionarios y endilgarle sus consecuencias a los accionados.

Así, en el num. 2.2.8. del escrito de tutela los accionantes se limitan a señalar que el 21 de diciembre de 2010 el Tribunal, recibió la cesión de CEC a Soinco sin indicar, porque ello no ocurrió, si ese recibo vino al expediente del proceso arbitral aparejado de alguna solicitud concreta y jurídicamente

relevante, lo cual no pueden asegurar los demandantes por la simple razón de que ello nunca ocurrió.

En el num. 2.2.9. del mismo escrito de tutela indican los accionantes que la cesión CEC – Soinco se aportó al expediente, lo que en manera alguna tiene consecuencias jurídicas de ninguna índole; y para mayor abundar en la confesión de su inexcusable inactividad, los accionantes buscan apuntalar su queja en el hecho de que la secretaria del Tribunal recibió e impuso su firma sobre el documento de cesión. Este argumento denota el sinsentido de la acción porque a nadie escapa que los secretarios de los Despachos Judiciales tienen la obligación de dar constancia de los escritos que reciben pero no tienen capacidad alguna para definir ni concretar situaciones jurídicas privativas de los jueces.

Lo propio es predicable de lo afirmado en los nums. 2.2.11 y 2.2.12, luego innecesariamente repetido en el memorial introductorio de este trámite, en el sentido de aludir a los alegatos de conclusión presentados por Cedelca como una muestra de aquiescencia de esa parte de las cesiones, posición que carece de toda sindéresis. Lo que se afirme o deje de afirmarse en un memorial, en tanto no sea un memorial por el cual se disponga sobre el derecho en litigio, en manera alguna puede producir la consecuencia deseada por los accionantes, que solo podía producirse en virtud de la observancia de las disposiciones que ellos nunca pusieron en marcha y que, por esa simple razón, no podían mover a los árbitros del proceso CEC – Cedelca a desplegar una actividad necesariamente rogada por mandato de la ley.

Al haberse concluido con arreglo a derecho que lo celebrado entre Soinco y los accionantes fue una cesión de derechos litigiosos, el trámite legal competente a ese tipo de contrato no se suple mediante meros hechos intrascendentes como los de aportar documentos a un expediente judicial sin mediar petición alguna y con pretermisión de las normas sustanciales y de procedimiento propias de ese tipo negocial.

Como puede observarse en la nota a pie de página no. 1 de este documento, entre las páginas 19 y 20 del escrito de tutela, los accionantes transcriben memorial de su propia autoría en el que, con algunas líneas de diferencia, ellos mismos califican inicialmente a las cesiones como de derechos crédito y luego como de derechos litigiosos.

Lo anterior, con el simple propósito de destacar, como ya se ha dicho, que la inacción, la incuria y la propia confusión predicable de los accionantes sobre los documentos que suscribieron, no les permite transferir las consecuencias de esa conducta a los Magistrados accionados.

Esta ambivalencia así como la deliberada entremezcla entre la cesión de créditos y de derechos litigiosos son en general una constante a lo largo del extenso escrito de tutela, pues abundar en la confusión, que es la única vía posible que los accionantes tienen para salvar la incoherencia de su planteamiento.

a) Los tribunales de arbitraje nada pueden decidir fuera de la órbita de los asuntos contractuales que incumben a los contrayentes del pacto arbitral que los habilita para fallar, ni pueden suplantar en sus cargas a las partes ni a los terceros que pudieran tener un interés legítimo y tutelado por la ley para tomar parte en el arbitraje

La acción emprendida contra los Magistrados accionados consiste en que supuestamente ellos no apreciaron lo ocurrido en el tribunal de arbitraje que tuvo lugar entre CEC y Cedelca, en donde se habría consumado la indebida valoración de una evidencia probatoria que en realidad es inexistente pero que de tenerse por existente es perfectamente inocua, como lo indico enseguida.

De extendido conocimiento es que los tribunales arbitrales tienen una competencia determinada por la voluntad de las partes contrayentes de un pacto de ese talante, por ende la misma está categóricamente restringida a las diferencias que las partes someten a su consideración.

Ello, porque su competencia la determina ese querer común de sustraerse de la jurisdicción permanente del Estado para habilitar temporalmente a particulares que hacen esa veces. En lo que interesa a esta tramitación, viene al caso señalar que los árbitros del juicio CEC – Cedelca solo fueron investidos de la atribución de conocer las diferencias asociadas al contrato que tuvo lugar entre ellas.

Por la anterior razón, aquel panel arbitral se limitó a registrar la aportación de los documentos contentivos de las cesiones en los antecedentes del laudo, que no son otra cosa que un recuento procesal que lo ordena el artículo 278 del Código General del Proceso.

Lo dicho no es baladí, porque lo que sí es material y jurídicamente trascendente es que la parte resolutive del laudo del 4 de abril de 2014 fulmina una condena dineraria a favor de CEC y en contra de Cedelca sin miramiento, cortapisa ni condicionalidad alguna. No hay declaración ni condena alguna que favorezca a los accionantes y esa ausencia de decisión en el sentido indicado ni es culpa de los árbitros que emitieron el laudo, ni tampoco de los Magistrados accionados, sino exclusivamente de los accionantes.

Luego no puede formularse embate contra los accionados por malinterpretar las pruebas de ese proceso, porque la solución prevista en la ley para que los accionados hubieran buscado la justicia que sostienen que les fue negada está prevista en la ley y su inobservancia es consecuencia de las omisiones de los promotores de la tutela: la tiene prevista el artículo 37 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto Arbitral) que inobjetablemente habilitaba a los accionantes para adherir al pacto arbitral y hacer valer sus derechos, cosa que no hicieron. No puede entonces trasladarse a los accionados una carga que la ley no les impone.

Lo anterior, con independencia de la ya indicada inactividad de los accionantes en relación con la tramitación de la cesión de derechos litigiosos a su favor, que no tiene explicación ni justificación alguna.

Restaría únicamente agregar la máxima de la práctica judicial según la cual: “Donde nada se pide, nada se resuelve”, la cual resume la conducta pasiva de los accionantes en el juicio arbitral, contra la cual ahora se pretenden rebelar.

b) Aparecer relacionado en los Antecedentes del laudo no constituye una declaración judicial vinculante ni produce efecto alguno

Otra parte de la sustentación de la acción de tutela que nos ocupa raya en lo pueril y consiste en que los accionados incurrieron en causal de procedencia de la misma por omitir que el laudo CEC – Cedelca se ocupó de las cesiones que se dicen no analizadas, en perjuicio de las garantías de los promotores de la presente acción.

Como es apenas lógico, el laudo en cuestión relacionó en sus antecedentes el hecho de que a ese plenario se agregaron unos documentos – los de cesión – en relación con los cuales, nadie, nunca, ejerció ningún acto procesal de impulso ni solicitó pronunciamiento alguno.

Pretender entonces que los Magistrados accionados valoraron equivocadamente la evidencia procesal allegada al proceso ejecutivo que fallaron en segunda instancia y que se dice corresponder con el laudo arbitral de abril de 2014 es tanto como “buscar al ahogado aguas arriba”, al ser evidente, como se viene exponiendo, que en dicho juicio arbitral no podía adoptarse ninguna decisión sobre las cesiones de derechos: y la única razón para que ello fuera así es que los accionantes se abandonaron negligentemente a su suerte y ahora buscan, por el excepcional camino de la tutela, que la Sala de conocimiento y decisión los suplante en la omisión de sus cargas.

Ese no es el objetivo de la Acción de Tutela.

III. Improcedencia absoluta de las peticiones de los accionantes por ausencia de irrazonabilidad en la providencia objeto de Acción de Tutela

Mal haría el suscrito apoderado en fatigar a la Sala con extenuantes extractos de la jurisprudencia constitucional relativa a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Está suficientemente decantado que esta excepcional acción, tratándose de providencias judiciales, solo tiene vocación de prosperidad ante la acreditación de interpretaciones no razonables imputables a un operador judicial y lesivas de las garantías *ius* fundamentales de un sujeto procesal.

Los accionados cumplieron con su deber legal de interpretar la realidad procesal puesta en su conocimiento, sin faltar a su deber legal de proceder en tal sentido, pero sin desbordarlo suplantando a los accionantes, como ellos lo pretenden en forma postrera e irremediable.

IV. Falta total de relevancia constitucional de la acción de tutela para este caso

Otra cuestión de marcado interés en el presente asunto la constituye la absoluta irrelevancia constitucional del planteamiento de los accionantes.

Al respecto y con genuinas excusas a la Sala, me resulta forzoso transcribir los siguientes lineamientos jurisprudenciales que abordan el punto:

En sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022 sobre este puntual asunto, precisó la Corte Constitucional:³

“En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”-De acuerdo con la Sentencia SU-573 de 2019 el asunto debe ser “trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.”.

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica. Como se indica en la sentencia mencionada, un asunto carece de relevancia constitucional cuando, entre otras razones,

“(i) la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango reglamentario o legal salvo que de esta se “desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales”

³ Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo

o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general”.

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales ^[114].

(...)

En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”

En la sentencia 02739 del 22 de mayo de 2019 indicó el Consejo de Estado – Sección Cuarta:⁴

“Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en *«la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional.»*

Como es claro, la inconformidad con las interpretaciones de los jueces y con mayor razón con las que hacen las Altas Cortes, no es terreno fértil para alentar acciones constitucionales, mucho menos en términos como los que ahora son objeto de análisis.

V. Solicitud

Solicito en consecuencia, en nombre de Cedelca como tercero interesado en la presente acción de tutela, que se desestimen las exóticas peticiones de los

⁴ Ponente Dr. Julio Roberto Piza

accionantes, tendientes a obtener un fallo de “reemplazo” para sustituir el impugnado, por no ser éste de su agrado.

De los señores magistrados con toda atención y respeto,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. P. Riveros Lara', with a horizontal line underneath the signature.

Juan Pablo Riveros Lara
CC 79.242.875
TP 71774 CSJ

Bogotá D.C., 16 de junio de 2025